ECUADOR (Nivel 2 Lista de control)

Ecuador es país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata con fines de explotación sexual y trabajos forzados. Se cree que la mayoría de las víctimas de la trata son reclutadas en el país; provienen de las zonas fronterizas y del altiplano central y son trasladadas a los centros urbanos, donde son explotadas con fines comerciales sexuales, forzadas a trabajar en servicios domésticos, a mendigar, a trabajar en las minas y a realizar otros trabajos peligrosos. Los indígenas ecuatorianos son vulnerables a los trabajos forzados. Se ha informado que algunas familias han permitido a los traficantes hacerse cargo temporalmente de sus hijos con el fin de ganar dinero, tanto en el país como en países vecinos; estos niños se ven obligados a trabajar como empleados domésticos, vendedores ambulantes y mendigos. También se han denunciado casos de niños ecuatorianos obligados a participar en actividades delictivas, como el narcotráfico y el robo, mientras que otros han sido reclutados por grupos armados a lo largo de la frontera septentrional con Colombia. En el curso del año se ha hallado a niños ecuatorianos sometidos a trabajos forzados en Brasil y Venezuela. Hay mujeres ecuatorianas que se han visto forzadas a trabajar en la prostitución en Colombia, Perú y España. Ecuador es país de destino de mujeres y niñas colombianas y peruanas víctimas de la trata con fines de explotación sexual. Refugiados y migrantes colombianos son obligados a realizar trabajos forzados en las plantaciones de aceite de palma. Circularon unos pocos informes acerca de casos de turismo sexual en relación con ciudadanos ecuatorianos que visitaban destinos turísticos como Tena y las Islas Galápagos.

El Gobierno del Ecuador no cumple integralmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata, pero está desplegando considerables esfuerzos para lograrlo. Durante el año, las autoridades redoblaron sus esfuerzos por investigar delitos relacionados con la trata mediante el establecimiento de una unidad de policía especial contra la trata, e incrementaron el número de centros que prestan asistencia general a los jóvenes en situación de riesgo, incluidas las víctimas de la trata de personas. Sin embargo, en el curso del año el gobierno no dictó ninguna condena contra los responsables de la trata, la complicidad oficial siguió siendo un problema importante y en gran parte desatendido, y los servicios a las víctimas siguieron siendo mínimos en muchas partes del país. Por consiguiente, se ha clasificado a Ecuador en el Nivel 2 de la Lista de control por segundo año consecutivo.

Recomendaciones para el Ecuador: Hacer coincidir los crecientes esfuerzos por investigar y enjuiciar los delitos de trata de personas con iniciativas destinadas a condenar y castigar a los responsables de la trata, incluidos los funcionarios públicos cómplices en ese delito; elaborar y poner en práctica procedimientos oficiales para identificar a las víctimas de la trata entre las poblaciones vulnerables, como las que trabajan en la prostitución o los niños y trabajadores migrantes; aumentar la financiación de servicios especializados para las víctimas de la trata, incluidos los adultos; mejorar la capacitación anti-trata de agentes de policía locales, jueces, inspectores laborales, funcionarios de inmigración, asistentes sociales y otros funcionarios públicos; brindar a las víctimas extranjeras alternativas legales a su expulsión a países donde podrían estar expuestas a penurias o represalias; mejorar la recopilación y coordinación de datos, y concientizar al público acerca de todas las formas de la trata de personas.

Enjuiciamiento

Durante el año, la labor del gobierno en cuanto a la aplicación de la ley contra los delitos de la trata de personas tuvo resultados desiguales. El Ecuador prohíbe toda forma de trata de personas de acuerdo a lo establecido por el artículo 190 del Código Penal ecuatoriano, reformado en el año 2005, que establece penas de seis a nueve años de privación de libertad por los delitos de trata con fines de explotación laboral, y de 8 a 12 años por los delitos de trata con fines de explotación sexual. Estas penas son suficientemente severas y conmensurables con las prescritas para otros delitos graves, como la violación. Otras leyes, como las que prohíben diversas formas de explotación sexual, también se aplican contra delitos de trata de personas.

En julio de 2011, el gobierno estableció en Quito una unidad de policía contra la trata, a la que dio una dotación de 14 agentes para encargarse de la detección e investigación de casos de trata. El año anterior, la unidad de policía encargada de investigar todos los delitos contra menores también se había encargado de investigar casos de trata, pero no pudo dar cuenta del número de casos investigados. La unidad responsable de enjuiciar los casos de delincuencia organizada siguió ocupándose de los casos de trata, sin disponer de recursos suficientes para atender la gran cantidad de casos acumulados. La recopilación de datos sobre delitos relacionados con la trata siguió siendo desigual.

La nueva unidad de policía declaró haber iniciado 49 investigaciones de casos de trata entre junio y diciembre de 2011, gran parte de los cuales relacionados con trabajos forzados. Las autoridades informaron que todas estas investigaciones condujeron a enjuiciamientos, gracias a una nueva política que dispone el trabajo conjunto de la policía y los fiscales durante la etapa de investigación. No obstante, el gobierno no informó de ninguna condena por trata de personas en 2011. Si bien las autoridades consiguieron imponer condenas con arreglo a leyes que prohíben varios delitos sexuales, no se dispuso de datos desglosados que permitieran confirmar si algunas de estas condenas eran por delitos de trata de personas. En cambio, los funcionarios informaron de la condena de tres delincuentes de la trata con fines sexuales en 2010.

Algunos jueces demostraron una falta de conocimientos sobre la trata de personas: un juez declaró sin lugar un caso de trata del que fue víctima un menor porque la prostitución es legal a partir de los 18 años, mientras que otro desestimó un caso de servidumbre doméstica fundándose en el argumento de que los acusados habían ayudado a la víctima porque le habían proporcionado alimento y albergue. Otros jueces redujeron los cargos de trata a cargos de proxenetismo o desaparición, delitos que conllevan penas más cortas. Organizaciones de la sociedad civil y algunos funcionarios señalaron que la corrupción impedía los trabajos de investigación y enjuiciamiento. Según las ONG, algunos agentes de policía eran socios de prostíbulos que empleaban a mujeres y niñas y les proporcionaban documentación falsa; señalaron también que los funcionarios del registro civil expedían a los niños documentos de identidad falsos, y que la policía amenazaba a las mujeres colombianas con deportarlas para obtener favores sexuales. Presuntamente, algunos agentes corruptos informaban a los traficantes acerca de inminentes redadas policiales. Pese a estas denuncias de corrupción relacionadas con la lucha contra la trata, no se enjuició ni se condenó por complicidad a ningún funcionario en 2011, pero sí se informó que un funcionario del gobierno local estaba siendo investigado por delitos relacionados con la trata. La unidad de policía especializada capacitó a varios miles de agentes de policía en siete ciudades, y oficiales de la policía asistieron a sesiones de capacitación ofrecidas por organizaciones internacionales. Funcionarios ecuatorianos trabajaron con autoridades venezolanas, brasileñas y colombianas para investigar varios casos internacionales

de trata con fines de explotación laboral.

Protección

Durante el año, el Gobierno del Ecuador ofreció pocas protecciones a las víctimas de la trata. Las autoridades informaron acerca de sus continuos esfuerzos por liberar a menores de la explotación sexual comercial, pero no aplicaron procedimientos sistemáticos para la identificación de víctimas adultas entre las poblaciones vulnerables, como las mujeres que trabajan en prostíbulos. Las autoridades remitieron a las víctimas a diferentes servicios a través del Instituto de la Niñez y la Familia, aunque las ONG señalaron que en algunos casos no se las remitía debidamente. No se presentó un cálculo confiable sobre el número total de víctimas de trata identificadas durante el período objeto del informe, aunque una ONG informó haber prestado asistencia en su albergue a más de 79 menores víctimas de la trata con fines de explotación sexual, y la unidad de policía especializada informó que había rescatado a 12 víctimas: cuatro víctimas de la trata con fines de explotación sexual, y el resto víctimas de la trata con fines de explotación laboral; 7 eran menores.

Una ONG mantuvo un albergue especializado capaz de atender simultáneamente a 25 niñas víctimas de la trata con fines de explotación sexual, y casi siempre funcionaba a plena capacidad. Había pocos servicios especializados y ningún albergue especializado para acoger a adultos víctimas de la trata o para niños varones. Las autoridades informaron que las víctimas menores de edad podían recibir servicios de atención general a través de una red de centros de protección de jóvenes en riesgo regentados por el gobierno, cuyo número pasó de 43 a 86 en el transcurso del año pasado, pero no se dispuso de datos sobre el número de niños víctimas de la trata de menores a los que se prestó ayuda en estos centros ni si todos los centros tenían la capacidad de prestar servicios o protección suficientes a dichas víctimas. El gobierno aportó fondos limitados a otros albergues de carácter general dirigidos por organizaciones de la sociedad civil. Además de estos servicios de corto plazo, el gobierno informó que había prestado a las víctimas asesoramiento, protección, capacitación laboral y formación educativa, pero no indicó cuántas víctimas recibieron estos servicios durante el año.

El gobierno alentó a las víctimas a cooperar en la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de la trata, y al menos una víctima lo hizo durante el año. El gobierno mantuvo y financió un programa de protección de víctimas y testigos, aunque este programa no disponía de recursos suficientes para las víctimas adultas. Muchas víctimas optaron por no participar en las investigaciones debido a insuficiente protección o a una falta de confianza en el sistema judicial. Las autoridades no penalizaron a las víctimas de la trata de personas por los actos delictivos cometidos como resultado directo de su condición de víctimas de trata. El Gobierno del Ecuador no ofreció alternativas legales al traslado de las víctimas extranjeras a países en los que estarían expuestas a penurias o represalias, aunque con frecuencia permitió a las víctimas extranjeras permanecer en el país temporalmente; sin embargo, se informó que en el pasado algunas víctimas extranjeras no fueron identificadas y fueron deportadas, en lugar de recibir servicios asistenciales. Según se ha informado, el gobierno prestó servicios a víctimas ecuatorianas repatriadas que habían sido sometidas a la trata de personas.

Prevención

El año pasado, el Gobierno del Ecuador continuó con sus esfuerzos de prevención de la trata. Según se informa, la Comisión Interinstitucional para lucha contra la Trata de personas empezó a

celebrar reuniones quincenales a finales de 2011, y el Ministerio del Interior estableció una Unidad contra la Trata encargada de coordinar la lucha contra este delito. Se descartó un proyecto de plan nacional para combatir la trata que incluía un presupuesto y trataba de abordar algunas dificultades, tales como los mecanismos deficientes de recopilación de datos y la escasez de fondos; asimismo, funcionarios informaron que estaban aplicando el plan de lucha contra la trata de 2006. El Ministerio de Turismo continuó con su campaña de información dirigida a prevenir la explotación sexual de menores en las zonas turísticas. Las autoridades locales trabajaron con una organización internacional y con organizaciones no gubernamentales para llevar a cabo actividades de concientización y prevención en sus respectivas localidades. El gobierno siguió financiando una campaña para prevenir la mendicidad estacional, práctica que en algunos casos comprende el trabajo forzado de menores. Casi todas las iniciativas de concientización se concentraron en la explotación de niños con fines sexuales o laborales. El gobierno no informó sobre la adopción de medidas para reducir la demanda de actos sexuales comerciales remunerados con adultos, ni de trabajos forzados, durante el período objeto del informe.